



Asamblea General Consejo de Seguridad

Distr. general
14 de agosto de 2009
Español
Original: inglés

Asamblea General
Décimo período extraordinario de sesiones de emergencia
Tema 5 del programa
Medidas ilegales israelíes en la Jerusalén Oriental
Ocupada y el resto del Territorio Palestino Ocupado

Consejo de Seguridad
Sexagésimo cuarto año

Cartas idénticas de fecha 13 de agosto de 2009 dirigidas al Secretario General y al Presidente del Consejo de Seguridad por el Observador Permanente de Palestina ante las Naciones Unidas

Tengo el honor de transmitirle un memorando dirigido al Secretario General y al Presidente de la Asamblea General que he recibido hoy del Excmo. Sr. Tayseer Khaled, Jefe del Comité Nacional Palestino para el Registro de los daños y perjuicios causados por la construcción del muro y miembro del Comité Ejecutivo de la Organización de Liberación de Palestina, en relación con el quinto aniversario de la emisión de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el muro (véase el anexo).

Le agradecería que tuviera a bien disponer que el texto de la presente carta y su anexo se distribuyan como documento del décimo período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General, en relación con el tema 5 del programa, y del Consejo de Seguridad.

(Firmado) **Riyad Mansour**
Embajador
Observador Permanente



**Anexo de las cartas idénticas de fecha 13 de agosto de 2009
dirigidas al Secretario General y al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Observador Permanente de Palestina
ante las Naciones Unidas**

[Original: árabe e inglés]

Memorando

**Al Secretario General de las Naciones Unidas,
Al Sr. Presidente y a los miembros de la Asamblea General,
Del Jefe y los miembros del Comité Nacional Palestino
para el Registro de los daños y perjuicios causados por
la construcción del muro, cinco años después de la emisión
de la opinión consultiva pertinente de la Corte Internacional
de Justicia**

El Comité Nacional Palestino para el Registro de los daños y perjuicios causados por la construcción del muro celebró una reunión el 9 de julio de 2009 en conmemoración del quinto aniversario de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, emitida en cumplimiento de la resolución ES-10/14 de la Asamblea General, que fue aprobada en la 23ª sesión plenaria del décimo período extraordinario de sesiones de emergencia, el 8 de diciembre de 2003. Cabe mencionar que el Comité Nacional Palestino fue establecido en virtud de un decreto del Presidente Mahmoud Abbas y de una decisión adoptada por el Comité Ejecutivo de la Organización de Liberación de Palestina (OLP).

En su reunión, el Comité Nacional Palestino estudió la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, incluida la resolución en virtud de la cual se creó el Registro de las Naciones Unidas de los daños y perjuicios causados por la construcción del muro en el territorio palestino ocupado, con sede en Viena. El Comité examinó también las actividades del Estado de Israel y su incumplimiento de la opinión consultiva, en que se exige a Israel que ponga fin a la construcción del muro, desmantele las partes ya construidas e indemnice por los daños y perjuicios causados a propiedades e intereses de instituciones públicas y particulares palestinos.

En vista de ello, el Comité decidió dirigir un llamamiento al Secretario General de las Naciones Unidas y al Presidente y los miembros de la Asamblea General, exhortándolos a cumplir sus responsabilidades y a presionar al Estado y al Gobierno de Israel para que respeten la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia con respecto al muro que se está construyendo dentro del territorio palestino ocupado desde 1967, en flagrante violación de las normas de derecho internacional y las resoluciones de legitimidad internacional.

El 15 de mayo de 1948 se declaró el Estado de Israel, con arreglo a la resolución 181 (II) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Estado de Israel fue admitido como miembro de las Naciones Unidas en virtud de la resolución 273 (III) de la Asamblea General, de 11 de mayo de 1949, y fue reconocido como país amante de la paz, tras declarar expresamente ante la Asamblea que se comprometía plenamente a respetar y aplicar todas las resoluciones de las Naciones

Unidas pertinentes a la cuestión de Palestina, incluida la resolución 181 (II) relativa a la partición de Palestina, el régimen internacional especial para la ciudad de Jerusalén y el derecho de los refugiados palestinos a regresar a sus hogares y recuperar sus bienes, y otras resoluciones que el Estado de Israel ha incumplido desde el día en que se creó. El Estado de Israel no sólo se anexionó por la fuerza un 23% del territorio asignado al Estado árabe, sino que recurrió a medios ilícitos para anexionarse progresivamente más de la mitad del total del territorio asignado al Estado árabe, en contra de lo estipulado en la Carta de las Naciones Unidas.

En 1967 el Estado de Israel logró ocupar y controlar por la fuerza el resto del territorio del Estado árabe. La comunidad internacional rechazó y condenó la ocupación israelí de 1967 y las graves contravenciones de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y el principio de no utilización de la fuerza en las relaciones internacionales cometidas por Israel. Sin embargo, el Estado de Israel sigue resuelto a mantener la ocupación de los territorios palestinos y el control sobre ellos, pese a que la ocupación infringe todos los principios y normas del derecho internacional y las resoluciones de legitimidad internacional.

La contravención israelí de los principios y disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones de legitimidad internacional no se detuvo en aquel momento, sino que en los últimos años Israel ha trazado, llevado a la práctica e impuesto intencionadamente una política de anexión de facto de tierras palestinas a los territorios ocupados, como atestiguan los siguientes hechos:

- Israel alienta a sus ciudadanos a apropiarse ilícitamente de tierras y propiedades palestinas mediante el establecimiento de cientos de colonias y asentamientos en territorios palestinos y les da facilidades para ello;
- Asimismo, alienta y apoya el traslado de sus ciudadanos a territorios palestinos, ofreciendo facilidades administrativas y financieras a quienes desean vivir en los territorios palestinos ocupados y establecer su residencia en ellos;
- El Estado de Israel se ha anexionado la ciudad de Jerusalén y las tres aldeas palestinas de Latrún ocupadas en 1967;
- Asimismo, se ha anexionado miles de *dunum* de tierras palestinas para construir el muro dentro del territorio palestino ocupado;
- Israel no solo ha hecho caso omiso de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el muro y la necesidad de desmantelarlo e indemnizar a los afectados por su construcción, sino que, pese a la opinión consultiva, sigue realizando labores de construcción.

Estos hechos demuestran la falta de respeto de Israel por la comunidad internacional, sus convenciones y sus resoluciones.

La actitud desafiante del Estado de Israel ante la voluntad internacional, haciendo caso omiso de sus resoluciones, principios y leyes, y las continuas violaciones de los derechos legítimos del pueblo palestino a la libre determinación y la soberanía permanente sobre sus recursos y riqueza no hubieran sido posibles sin el silencio de la comunidad internacional y su inacción injustificada en lo que respecta a las responsabilidades jurídicas que le incumben en virtud de la Carta. Este silencio continuo y duradero ha alentado al Estado de Israel a persistir en sus agresiones contra la población palestina en el territorio palestino ocupado,

consistentes, entre otras cosas, en delitos como el asesinato, la tortura, los malos tratos, el exilio forzado y la detención ilegal, la imposición de castigos colectivos mediante el aislamiento y asedio de ciudades y comunidades, la imposición deliberada de condiciones de vida difíciles a algunas personas, el saqueo de los recursos y la riqueza de los palestinos y la destrucción, el saqueo y la confiscación de sus bienes.

Los aborrecibles delitos de Israel y sus contravenciones de los principios y las disposiciones de la Carta llevaron a la Asamblea General a dejar de considerar a Israel un Estado amante de la paz. Así se establece en muchas resoluciones internacionales, como las resoluciones de la Asamblea General 24/209 C, de 11 de diciembre de 1987, y 45/83, de 13 de diciembre de 1990.

Asimismo, en vista de las atrocidades y violaciones cometidas por el Estado de Israel, la Asamblea General ha empleado un lenguaje de una dureza sin precedentes para censurarlo, culpándolo de cometer crímenes de guerra en los territorios palestinos ocupados. Esto se menciona claramente en el contexto y el contenido de la resolución 43/58 A y B de la Asamblea General, de 6 de diciembre de 1988, en que la Asamblea “declara una vez más que las infracciones graves de dicho Convenio [Convenio de Ginebra] cometidas por Israel son crímenes de guerra y una afrenta contra la humanidad”. Esta aseveración se reiteró en las resoluciones de la Asamblea General 44/48, de 8 de diciembre de 1989, 45/74, de 11 de diciembre de 1990, y 46/47, de 9 de diciembre de 1990.

El muro que Israel empezó a construir en junio de 2002, en el apogeo de la guerra por la seguridad de los asentamientos que en aquel momento Israel denominó “Operación Muralla Protectora”, refleja la naturaleza ofensiva, tanto en su concepción como en su ejecución, de esa maniobra, que constituye la fase más alarmante del proyecto de expansión de los asentamientos israelíes. Se demuestra así que la Corte Internacional de Justicia no erraba en las consideraciones y conclusiones que hizo públicas en julio de 2004, al emitir su opinión consultiva respecto del muro.

Desde el punto de vista político, la Corte Internacional de Justicia reafirmó que la Ribera Occidental, según las fronteras establecidas en junio de 1967, incluida Jerusalén, era un territorio ocupado y no un territorio en litigio, y que la construcción del muro, tanto por el trazado seguido hasta ese momento como por el trazado subsiguiente, restringía el derecho del pueblo palestino a la libre determinación y a crear un Estado palestino independiente, derecho que garantizan varias resoluciones con validez internacional, entre ellas la resolución 181 (II) de la Asamblea General, relativa a la partición de 1947, y que no se debe vulnerar, independientemente del momento en que se ejerza.

La opinión consultiva rechazó así la versión israelí y su postura respecto de la identidad del territorio en el que se está construyendo el muro: no solo pertenece a la Ribera Occidental, incluida Jerusalén, sino que además fue asignado al Estado palestino en virtud de la resolución 181 (II) de la Asamblea General. Ésta es una importante dimensión política de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que se agrega a su fundamental dimensión jurídica. Vincula así el aspecto jurídico con el político y arroja luz respecto del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, derecho que Israel trata de restringir de muy diversas formas mediante la construcción del muro.

La opinión consultiva destacó además el carácter árabe de Jerusalén y sus alrededores. Declaró, en contra de las alegaciones israelíes y de las leyes de anexión aprobadas por el Knesset, que Jerusalén y sus alrededores, donde el muro ya está construido, son territorio palestino ocupado. Por lo tanto, el argumento israelí de que Jerusalén es la capital del Estado de Israel ha dejado de tener validez. La Corte declaró también que Israel debe respetar el derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos y asegurar el acceso libre a los lugares sagrados que están bajo su control, acceso que se ve dificultado por la construcción del muro en Jerusalén y sus alrededores.

No es fácil distinguir los aspectos políticos de los jurídicos en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico la Corte afirmó claramente que no estaba convencida de que el trazado concreto del muro que había elegido Israel fuera necesario para conseguir sus objetivos en materia de seguridad. Según la opinión de la Corte, suprema autoridad jurídica internacional, el muro, a lo largo del trazado elegido, infringe gravemente diversos derechos de los palestinos, y las infracciones derivadas de ese trazado no pueden justificarse por exigencias militares o necesidades de seguridad nacional u orden público en Israel.

En consecuencia, la Corte Internacional de Justicia exigió al Estado de Israel que detuviera de inmediato las obras de construcción del muro y dismantelara las partes de dicha estructura, por constituir una violación del derecho internacional. Exigió también a Israel, la Potencia ocupante, que reparara los daños causados por la construcción y el dismantelamiento del muro.

En su opinión consultiva, de la Corte Internacional de Justicia exhortó a las Naciones Unidas, y en especial a la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, a adoptar medidas para poner fin a la situación ilegal resultante de la construcción del muro. Decidió también crear un registro de daños. Asimismo, exhortó a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro y no prestar ayuda o asistencia política, diplomática o material al Estado de Israel a ese respecto. En lo referente al alcance de los daños que se consideran en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, no se trata únicamente de perjuicios o pérdidas económicas causadas a particulares, sino de *todos* los daños y perjuicios, como se estipula en el párrafo 163 del documento. Estarían incluidos, por lo tanto, los daños a las tierras de propiedad particular, habices, tierras del Gobierno y de las autoridades municipales y consejos locales; terrenos, pastos y recursos naturales comunales, en particular las fuentes de agua; la propiedad pública y las infraestructuras, y todos los daños ocasionados a los servicios sociales, educativos y de salud.

Las Naciones Unidas, por medio de la Asamblea General, han examinado en más de una ocasión las políticas de Israel y la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia: primero en diciembre de 2003 y, más tarde, en julio de 2004, fecha en la que la Asamblea General decidió aprobar la opinión consultiva de la Corte, con los votos de una mayoría compuesta por 150 Estados. En diciembre de 2006, la Asamblea decidió crear la Oficina del Registro de Daños y Perjuicios por 146 votos a favor.

A pesar de todo, Israel sigue haciendo caso omiso de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, y el muro continúa avanzando por el territorio palestino. Según las estimaciones de las organizaciones internacionales, algunas de las cuales forman parte de las Naciones Unidas, como la Oficina de Coordinación de

Asuntos Humanitarios (OCAH) y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), Israel ha terminado de construir el 66% del muro y está construyendo ahora un 10% adicional de los 723 kilómetros que lo componen, y que equivalen al doble de la longitud de las fronteras definidas en junio de 1967. Según esas mismas estimaciones, decenas de miles de ciudadanos palestinos con documentos de identidad de la Ribera Occidental que residen en 35 poblaciones quedarán atrapados entre el muro y la línea del Armisticio de 1949, así como unos 250.000 ciudadanos palestinos en Jerusalén y sus alrededores. Eso significa que el muro aislará a unos 285.000 ciudadanos palestinos de la Ribera Occidental. Los datos procedentes de diversos órganos de supervisión señalan que ya hay 125.000 ciudadanos en 28 poblaciones que han quedado aislados por el muro, rodeados por tres flancos, y otros 26.000 ciudadanos de otras ocho poblaciones han quedado aislados por cuatro flancos. El muro tiene más de 66 puertas con sistemas de control de acceso; en la mitad de ellas, las fuerzas de ocupación exigen autorizaciones de paso, mientras que las restantes están cerradas permanentemente. Esa es la realidad del muro: es un mecanismo de anexión y extensión y se le considera, con toda justicia, la fase más alarmante del proyecto de expansión de los asentamientos que Israel ejecuta en la Ribera Occidental, incluida Jerusalén. En el marco de ese proyecto, Israel pretende apoderarse del 22% del territorio de la Ribera Occidental, aproximadamente, y controlar los acuíferos subterráneos palestinos. Además del muro que puede verse al oeste, hay otro muro invisible en la frontera oriental: una zona de entre 15 y 20 kilómetros que separa la Ribera Occidental de la región del valle del Jordán, gobernada por una serie de decretos militares y dispositivos de control, zanjas y cercas, gracias a los cuales Israel controla alrededor del 23% de la Ribera Occidental. El objetivo patente de esta maniobra consiste en dictar los términos que definirían la solución política que Israel pretende imponer al pueblo palestino.

El Comité Nacional Palestino para el Registro de los daños y perjuicios causados por la construcción del muro expresa su reconocimiento a la Asamblea General por los esfuerzos que ha realizado para condenar y denunciar las prácticas y las violaciones israelíes, reafirmar el legítimo derecho del pueblo palestino a la libre determinación y respaldar su derecho a liberarse de la ocupación y el control de Israel, y presentar la cuestión del muro ante la Corte Internacional de Justicia. El Comité tiene la esperanza de que la Asamblea General procure seguir llevando a la práctica las normas del derecho internacional, así como los principios de la legitimidad internacional, mediante una intervención seria y efectiva que restituya la dignidad al pueblo palestino y lo proteja de los crímenes y las violaciones que sufre día tras día.

La Asamblea General puede obligar a Israel, la Potencia ocupante, a aceptar los principios y los compromisos jurídicos que establece la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, de la siguiente manera:

- Aprobando resoluciones claras en las que se obligue a los Estados Miembros a abstenerse de reconocer los hechos consumados que las fuerzas de ocupación israelí han impuesto en el territorio palestino ocupado al construir el muro, y prohibir que se preste apoyo de cualquier tipo a la Potencia ocupante para seguir construyéndolo.
- Aprobando resoluciones explícitas e inequívocas en las que se pida a Israel que detenga la construcción del muro, desmantele la parte construida y restablezca en el territorio palestino ocupado la situación anterior a la construcción del muro.

- Utilizando medidas diplomáticas de presión e influencia: si Israel rehúsa obedecer las resoluciones de la Asamblea General, se pedirá a los Estados Miembros de las Naciones Unidas que interrumpan la cooperación económica con Israel, a fin de obligarlo a cumplir las normas y procedimientos del derecho internacional y las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, así como los diversos instrumentos y mecanismos pertinentes emanados de las Naciones Unidas.

Al mismo tiempo, el Comité Nacional Palestino para el Registro de los daños y perjuicios causados por la construcción del muro exhorta al Secretario General y a la Asamblea General de las Naciones Unidas a que aclaren el cometido y las funciones de la Oficina del Registro de Daños y Perjuicios en Viena, que ya ha registrado las denuncias individuales de daños y perjuicios en varias poblaciones de la provincia de Yenin, al norte de la Ribera Occidental. Es necesario determinar si el registro se va a desarrollar en el marco de una operación continua en la que se integraría la investigación de los daños ocasionados al territorio como base para valorar la extensión y el monto de los daños derivados de la construcción del muro; si se limitará a los ciudadanos particulares o incluirá también a las instituciones públicas, conforme a lo establecido en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia; y si se tomará en consideración también la lista de peticiones palestinas, que el Comité Nacional Palestino ha examinado en más de una ocasión con los representantes de la Oficina del Registro de Daños y Perjuicios, en particular con su Director Ejecutivo, Sr. Vladimir Goryayiev, y que es la siguiente:

- La apertura, en el territorio palestino ocupado de una oficina del Registro de las Naciones Unidas subsidiaria de la de Viena para facilitar y fomentar la cooperación entre la parte palestina, que es la parte afectada, y las Naciones Unidas, y proteger los derechos palestinos conforme a lo establecido en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia.
- Reforzar y desarrollar la labor de registro de los daños derivados de la construcción del muro en el territorio palestino ocupado con personal adicional, bien capacitado y adiestrado; en la actualidad solo hay un número limitado de personas que realizan con excesiva lentitud una tarea de ingentes dimensiones en la que los afectados tienen puestas grandes esperanzas.
- Emplazar la oficina de registro de los daños derivados de la construcción del muro en la ciudad árabe de Jerusalén, con un programa de trabajo y una lista de prioridades establecidas por la misión de las Naciones Unidas en Palestina. Ésta será la manera de enviar al Gobierno de Israel un claro mensaje, a saber, que en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia se considera al Jerusalén árabe parte integrante del territorio palestino ocupado desde 1967.

Atentamente,

(Firmado) Tayseer **Khaled**
Jefe del Comité Nacional Palestino para el
Registro de los daños y perjuicios causados
por la construcción del muro
Miembro del Comité Ejecutivo de la Organización
de Liberación de Palestina (OLP)

Ramallah, 10 de julio de 2009